

RE: Alegatos recurso de apelación ordinario laboral 850013105002-2019-00008-01

Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 6/04/2021 6:32 PM

Para: escucho90@gmail.com <escucho90@gmail.com>

Doctor
Juan Solano

Cordialmente acuso recibido

Atentamente

César Armando Ramírez López
Secretario

De: juan solano <escucho90@gmail.com>

Enviado: miércoles, 31 de marzo de 2021 12:44 p. m.

Para: Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Alegatos recurso de apelación ordinario laboral 850013105002-2019-00008-01

Cordial saludo

Atentamente me permito remitir alegatos al recurso de apelación del proceso del asunto.

Agradezco la atención prestada

Atentamente

Juan Pablo Solano
Apoderado parte demandante

Yopal, 31 de marzo de 2021

Señores

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal

Proceso: Ordinario Laboral

Demandante: OMAR HOLGUÍN PEREZ

Demandado: COLPENSIONES y OTROS

Radicación: 850013105002-2019-00008-01

Ref.: Alegatos de Conclusión

Yo Juan Pablo Solano identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando como apoderado del señor Omar Holguín Pérez, por medio del presente memorial me permito allegar los correspondientes alegatos de conclusión con el fin de que se resuelva el respectivo recurso de apelación.

Alegatos de Conclusión:

De conformidad con la Jurisprudencia establecida por parte de la Honorable Corte Suprema de justicia en sentencias SL1421-2019, SL1452-2019, SL1688-2019 y SL1689-2019 determinó el alcance del deber de información a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones, estableciendo la procedencia de la ineficacia del traslado de régimen pensional cuando se acredite su inobservancia en los casos donde el afiliado pretende recuperar el régimen de prima media para acceder al reconocimiento de la prestación.

“Obligación de las administradoras del RAIS de brindar información clara, completa y comprensible al afiliado, antes de tomar la decisión de traslado – INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO

... la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casación y órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, encargada de la unificación e integración de la jurisprudencia laboral, ha establecido una clara línea interpretativa desde la sentencia relevante de 22 de septiembre de 2008, radicación 31.989, M.P. Dr. Eduardo López Villegas, citada también en las sentencias 31.314 de la misma fecha, 33.083 (de instancia) de 11 de noviembre de 2011 y replicada con algunas precisiones especiales en las sentencias SL 12136-2014, SL9519-2015, SL19447-2017, SL17595-2017, SL2372-2018, SL4964-2018, SL4989-2018 y las recientes SL1452-2019, SL1421-2019, SL1688-2019 y SL-1689-2019, en tanto advierten que “la reacción del ordenamiento jurídico a la afiliación desinformada, es la ineficacia o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado - artículos 271 y 272 Ley 100 de 1993-; de ahí que, es este, el tratamiento que le corresponde a la Sala darle al examen del acto de cambio de régimen pensional por trasgresión al deber de información”; pero además ha sido enfática en advertir (sentencia CSJ SL1452-2019), que las AFP, desde su creación, “tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional, a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional - artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 y demás disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal-.

Posteriormente, se agregó a dicho deber la obligación de otorgar asesoría y buen consejo -artículo 3°, literal c) de la Ley 1328 de 2009, Decreto 2241 de 2010- y, finalmente, se impuso la exigencia de doble asesoría -Ley 1748 de 2014, artículo 3.° del Decreto 2071 de 2015, Circular Externa n.° 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera”

Por otra parte, a manera de subreglas, expuso: “(ii) En el campo de la seguridad social, existe un verdadero e ineludible deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL19447-2017), pues dicho procedimiento garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, que el usuario comprende las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen; esto es que, previamente a tal acto, aquel recibió información clara, cierta, comprensible y oportuna. Luego, el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para dar por demostrado el deber de información”. “(iii) La aseveración del afiliado de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarse el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, por cuanto la documentación soporte del traslado debe conservarla en sus archivos, y en tanto es la obligada a observar el deber de brindar información y probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento”. “(iv) Ni la legislación ni la jurisprudencia establecen que se debe contar con una expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información; de modo que procede sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo (negrillas de la ponente)”, texto con el cual se absuelve el punto de inconformidad expuesto por el apelante por pasiva, quien erróneamente considera que las directrices que sobre la materia ha señalado nuestro máximo órgano de cierre solamente se aplican únicamente a los beneficiarios del régimen de transición o a quienes les faltaba poco tiempo para alcanzar el derecho. Adicionalmente en la última sentencia en cita, enfatiza en que “(...) se declarará la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS, determinación que implica privar de todo efecto práctico al traslado, bajo la ficción jurídica de que nunca se trasladó al RAIS o, más bien, siempre estuvo afiliado al RPMPD (...)” Pues bien, en este orden, itera la Sala que la selección de uno de los regímenes del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, es libre y voluntaria por parte del afiliado, tal y como lo dispone el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. La trasgresión a tal derecho se encuentra sancionada en forma expresa por el art. 271 del mismo compendio, advirtiendo que tal acto quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. Página 8 de 13 En consecuencia, esta decisión libre y voluntaria del afiliado, deberá apreciarse conforme lo reseña Nuestro Máximo Órgano de cierre jurisdiccional y la normativa vigente en la materia; es decir, como aquella especial obligación de información a cargo de Administradora del Régimen de Ahorro Individual, además de la asesoría, que conlleve al logro de una relación contractual transparente, lo que implica incluso, nitidez en la competencia en el mercado, con el único propósito que la persona emprenda un proceso racional de deliberación frente a las opciones que tiene a su alcance, sopesando las ventajas y desventajas que la misma le traerá a futuro, no solo frente a la posibilidad de acceder al beneficio pensional a una edad en la cual pueda disfrutarlo, sino también que no le conlleve perjuicios desde el punto de vista económico; dicho de otra manera, al encontrarse en juego la vida digna, la obligación de las administradoras es de un rango superior”

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Ha decantado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el tema de la prescripción entratándose de derechos en materia de seguridad social, a través de sentencia emitida por el Honorable Magistrado Doctor Jorge Mauricio Burgos Ruiz del 30 de abril de 2014, con radicado No. 43892 e identificación alfa numérica SL5470-2014:

“(...) si bien el asegurado no consolidó su derecho a la pensión de vejez especial como periodista durante la vigencia del Decreto 1281 de 1994, lo cierto es que esa normatividad le creó una expectativa legítima respecto del régimen de transición que le permitía acceder al derecho especial, con las exigencias en ella previstas, lo cual es susceptible de protección y no podría ser desconocido por el legislador, porque tal entendimiento resultaría regresivo y contrariaría el ordenamiento superior, concretamente los principios consagrados en el artículo 48 de la Carta que entroniza a la seguridad social como un derecho irrenunciable y tiene en el principio de progresividad uno de sus báculos.(...)”

Se puede concluir de la anterior jurisprudencia que en el presente caso, si bien es cierto, el demandante presentó la solicitud de nulidad pasados varios años, requisito establecido por el artículo 1750 del Código Civil colombiano, por tratarse de un derecho con carácter de seguridad social, como es el del régimen de transición, se torna imprescriptible e irrenunciable de conformidad con el artículo 48 del ordenamiento superior; este término establecido por el Código Civil no puede convertirse en un obstáculo para exigir la anulación del traslado de régimen pensional, ya que solamente el afiliado percibe la dimensión que comprende el régimen en el cual se encuentra cuando se le va a liquidar la pensión y no al momento de hacer efectivo el traslado.

Por lo anterior solicito señor Juez se confirme el fallo de primera instancia, en aras de salvaguardar las garantías procesales de mi defendido señor Omar Holguín Pérez y garantizar su derecho a acceder a la prestación de vejez digna dentro del régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES.

Al suscrito de le puede notificar en la Calle 18 #26 11 de la ciudad de Yopal correo electrónico escucho90@gmail.com y teléfono 3194590931.

Atentamente



Juan Pablo Solano Montenegro

CC 1049608791

TP 226944